

LA LIEBRE MECANICA Y EL GALGO CORREDOR

La paz actual con el M-19

William Ramírez Tobón*

¿Qué significado tiene el actual proceso de paz con el M-19? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué determinantes influyeron sobre los dos protagonistas, grupo en armas, gobierno, para abordar la negociación? Las preguntas anteriores aun cuando planteadas en algunos casos por los analistas, no han sido articuladas en un solo propósito de análisis como sería conveniente si se quieren descifrar los verdaderos alcances de ese particular proyecto de paz. Este artículo pretende encarar, sin ser exhaustivo, tales planteamientos, ligando los interrogantes y algunas de sus posibles respuestas en una argumentación global que permita sintetizar y esclarecer el problema.

No se trata, por supuesto, de abordar una historia general del M-19 que caracterice el movimiento en una integral de condiciones ideológicas y prácticas político-militares. Lo que se busca es realzar algunas acciones del grupo guerrillero que por marcar hitos en su comportamiento y por ser altamente expresivas de su talante, nos permitan extraer conclusiones acerca de su voluntad actual para hacer la paz.

De igual modo y en cuanto al acápite dedicado al gobierno de Virgilio Barco, no hay que buscar allí un análisis a fondo sobre sus diversas

características. Los elementos destacados en la exposición son puntualmente correspondientes con los que le anteceden respecto del M-19: son el gobierno y el grupo guerrillero en su protagonismo particular dentro de un proceso de paz que aún no termina.

Ahora bien, y en gracia de la precisión, hay otro aspecto para aclarar. Cada vez que se le hace la crítica a la guerrilla aparece como imprescindible aludir a sus componentes político-militares: ¿hay desequilibrios temporales entre ellos?, ¿prima más uno sobre el otro? Es obvio que en toda guerrilla —trátase de la subversión de izquierda o de derecha—, hay un factor político que orienta las acciones destabilizadoras de un orden que se ve como objeto de reformas o de destrucción. Lo político siempre está allí como sustrato, lo que no disculpa, sin embargo, la necesidad de análisis destinados a establecer sus modos de presencia, su peso específico dentro de la acción global. Una cosa es, por ejemplo, el proyecto político como visión justificada del poder y de su ejercicio eventual, y otra, distinta, la acción deliberada que como instrumento de fuerza se va erigiendo en medio de acceso al poder. La primera es política por definición, en la segunda puede primar el acto político o el militar.

El caso del M-19 es bastante claro. Nos encontramos frente a una organización sin proyecto político en sentido estricto, ya que su visión del

* Sociólogo. Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

poder y de su ejercicio eventual carece de justificaciones adecuadas. En vez de ello hay en su discurso global difusas perspectivas: una intención estratégica de toma del poder, una afinidad ideológica por un socialismo nacional abstracto, una adhesión sentimental a los intereses del "pueblo" explotado. En cuanto a las acciones de fuerza nos encontramos frente a un movimiento que privilegia lo militar y en el que lo político aparece como resultado imprevisto o es supuesto, sin mayores análisis.

El aparte que se abre a continuación busca demostrar a partir de algunas de esas acciones — las más significativas —, el proceso de debilitamiento progresivo del M-19 y tras de éste, la aparición de su actual voluntad de paz.

1. LO POLITICO Y LO MILITAR EN EL M-19

No es posible entender la actual conducta pacifista de la organización sin observar las huellas de lo que han sido sus anteriores pasos en los terrenos militar y político. Pese a la imagen menos militarista del M-19 respecto de los otros grupos de izquierda, lo cierto es que a él, buena parte de lo político se le ha literalmente aparecido en el camino de varias importantes acciones concebidas dentro de un enfoque militar. No había en éstas, como es de consecuencia, un análisis sobre el carácter coyuntural y estratégico de los elementos oponentes (gobierno y fuerzas armadas, por ejemplo), de sus propios aliados, y menos aún del tipo de respuesta previsible, en unos y otros, según el examen cuidadoso de la situación. Dentro de la gran imaginación de Jaime Bateman, su primer comandante, y la mucho menor inspiración de sus jefes posteriores el Movimiento impulsaba ideas que al desarrollarse se salían de madre y sorprendían, algunas veces para bien, otras para mal, a sus ejecutores. Y no es que se pretenda encerrar la acción político-militar en los estrechos marcos de un planteamiento apto para la ingeniería civil o la administración de empresas. De ningún modo. Todos sabemos que los fenómenos sociales no tienen la mensurabilidad de un levantamiento topográfico, pero también sabemos que lo propio de la buena política es la previsión acertada de los acontecimientos según las tendencias de fuerza, y lo

propio de la mala política es equivocarse siempre... o casi siempre.

El M-19 ha tendido a equivocarse y ello explica la rudeza de los golpes recibidos y la disponibilidad actual para hacer una política de paz. Porque si bien la debilidad político-militar de la subversión tiende a empujarla hacia el terrorismo, esto no obsta para que dentro de determinadas condiciones sociales y políticas del contexto nacional, un grupo pueda reconocer la necesidad de acogerse a la vía de la lucha legal. De una guerrilla débil en lo militar pueden surgir líneas políticas conducentes a una apreciación más realista y menos costosa del entorno social.

El secuestro y asesinato del presidente de la CTC, José Raquel Mercado, en 1976, a dos años de aparición del grupo, ya evidencia en el M-19 el desconocimiento de la opinión pública y la incapacidad para manejar la dinámica militar de sus propios actos de fuerza. De un acto típicamente terrorista como es el secuestro de una persona no involucrada directamente en la guerra, el M-19 pretende constituirse en el instrumento de una voz popular que a través de un curioso plebiscito mural enjuiciaría al dirigente civil. El plebiscito no se da pero el juicio sí y, en una temeraria decisión que los hace víctimas de la evolución de los acontecimientos no previstos, se ordena la muerte de Mercado.

Pese a las notorias carencias políticas demostradas a raíz de lo de Mercado, y a las flaquezas militares reveladas por el contragolpe del ejército cuando el robo de armas del Cantón Norte a fines de 1978, el M-19 logra recubrirse, gracias a audacias y espectacularidades, de un prestigio distinto. Por efecto de la toma de la Embajada Dominicana a principios de 1980, la organización adquiere una resplandeciente imagen de eficacia política. La resonancia nacional e internacional de la acción, el tipo de respuesta, transaccional y mesurada, que le obligó a dar al represor mandato de Turbay Ayala, el autocontrol y la habilidad negociadora inmediata de los guerrilleros, fueron todos elementos de algo que parecía un afortunado plan para poner contra las cuerdas al gobierno. No obstante, la realidad fue muy otra. Como la sintetizó con su usual brillantez Jaime Bate-

man, aquello fue una "locura acertada" (1). Una locura militar realizada sin el suficiente aprestamiento táctico; con escasos recursos logísticos, en unas instalaciones altamente vulnerables ("teníamos un cálculo de dieciséis formas de entrarse a la embajada, dieciséis lados flacos") (2) y con el objetivo limitado de liberar a los compañeros presos en las cárceles de Bogotá. Muy pronto, la dinámica de los acontecimientos cambió la razón del operativo en un inesperado escenario de protagonismo político de la guerrilla, claramente resumido por un rebelde en los siguientes términos:

entonces se hace el análisis de los logros políticos, y concluimos que el objetivo había cambiado. El gobierno, además, no iba a soltar un solo preso y no nos quedaba sino una alternativa: comenzar a matar embajadores, o sacarle jugo a toda la negociación en el terreno político. Hicimos un listado de logros:

1. Se denunciaron las torturas y las violaciones de los derechos humanos en el país.
2. La imagen del gobierno y del presidente Turbay, en concreto, se deterioró.
3. Se hizo una confluencia de fuerzas democráticas en torno a esos hechos.
4. Hemos puesto a un país a negociar con la guerrilla, por primera vez en su historia.
5. No sólo se negocia, sino que el gobierno se compromete a firmar una serie de acuerdos a nivel internacional, para supervisar la marcha de los consejos de guerra y evitar las violaciones de los derechos humanos y las garantías legales.

Además, la guerrilla logró una imagen nunca antes vista, nacional e internacionalmente (3).

La lotería de la Embajada premió al M-19 pero, en el entusiasmo del consumo, del gasto de los dividendos, se le empañó la autocrítica sobre la debilidad de su estructura militar y el componente errático de su política. De ahí en adelante la organización autovaloró su potencia para poner en jaque al gobierno, para aumentar su prestigio sobre la base del protagonismo público y la audacia. Y, en una asombrosa convicción mágica que hacía carrera entre mandos altos y medios, autovaloró su suerte. No en vano el "Flaco" estaba protegido por un destino bienhechor que empezaba a hacerlo legendario.

El éxito de lo de la Embajada borró del todo el malestar que en buena parte de la militancia había dejado el desastre del robo de las armas al Cantón Norte. El delirio corto-placista de Bateman le había permitido imaginar un país donde la gente permanecía al margen de la lucha abierta no por ausencia de convicción política sino por falta de armas. Tener diez mil armas —según el cálculo inicial del arsenal— era tener diez mil brazos en combate frontal contra la oligarquía. La guerra revolucionaria quedaba concebida como un problema de logística y no de posibilidades políticas. O, en todo caso, la insurgencia popular como una realidad inmediata que había que armar ya, puesto que las posibilidades sociales y políticas se asumían como dadas.

Las ganancias de la Embajada anularon en Bateman el significado y la lección del Cantón Norte. A comienzos del año 81 el comandante aseguraba con pasión (4) que el M-19 iba a acabar con las "guerritas de guerrillas" porque lo que se iba a imponer era una guerra de verdad entre dos grandes ejércitos. Para Bateman la lucha irregular de las guerrillas generaba una dinámica empobrecedora en términos cuantitativos: como exponía poca gente al combate, ponía y cobraba pocas víctimas. Así, en esa relación, podrían pasar mil años sin que la relación guerrilla-ejército institucional dejara de ser la del insecto que hostiliza e impacienta al león.

La campaña militar de 1981 expresa el cambio de una organización que se sale de la ciudad y se lanza al campo. La ocupación de Mocoa, capital del Putumayo, por 150 guerrilleros, el desembarque en Nariño de 80 combatientes, la gruesa columna que se instala en el Chocó, son muestras del cambio de escala de la lucha. Y, por consiguiente, de la respuesta oficial: en sólo dos meses, en el Caquetá, caen 60 miembros del M-19, zona donde el ejército ha instalado siete batallones (5).

Durante el tiempo que aún le quedaba de vida, Bateman no dejó de reflejar la autoconfianza de

1. Olga Behar, *Las guerras de la paz*, Bogotá, Editorial Planeta, 1986, p. 203.
2. *Idem*, p. 209.
3. *Idem*, p. 209.

4. En una entrevista concedida a Alfredo Molano y al autor de este artículo.
5. Daniel Pécaut, *Crónica de dos décadas de política colombiana*, 1968-1988, Bogotá, Siglo XXI, pp. 348 y 374.

una organización que se sentía llamada a liderar el proceso de la toma del poder por las armas. Para él, el M-19 llevaba la iniciativa respecto de los otros grupos de izquierda y aun respecto del gobierno. Dentro de tal presunción, ¿qué perspectiva tenían sus propuestas de paz lanzadas durante la toma de la Embajada y en los inicios de la gestión Betancur?

Jaime Bateman también debía considerar que la política no era tanto el ejercicio de la verdad como el de la oportunidad. El, por cierto mejor comunicador que político, comprendió que era muy oportuno hablar de paz aun cuando no fuera veraz y sincero hacerlo. Para el comandante, el planteamiento pacifista, el llamado a la negociación, era no sólo un medio de tomar la iniciativa frente a los competidores de izquierda y el gobierno, sino también un inmejorable vehículo de promoción pública. El M-19, así, no podía pensar seriamente en la paz porque en el esquema de sus dirigentes la organización iba en el camino de la toma violenta del poder y a ningún convencido del triunfo sobre el enemigo se le ocurre extender el ramo de olivo. En la guerra las transacciones aparecen cuando los contendores saben que ninguno de los dos se impondrá sobre el otro, o cuando una victoria se prevé tan costosa que puede asimilarse a una derrota. Ninguno de estos dos casos era el del M-19. Para su estado mayor la guerra grande venía ya y el hablar de paz era una forma de abordarla ventajosamente. La falta de seriedad que empezó a señalársele a Bateman en sus últimos tres años de vida (de la toma de la Embajada a su muerte en 1983) por sus propuestas, contrapropuestas, esguinces y abstracciones frente al problema de la paz, expresa el verdadero trasfondo que lo animaba.

A comienzos de 1983, en Panamá, los dirigentes del M-19 deciden reiniciar la lucha armada. "Muchos factores concurren en esta decisión. La influencia de Cuba, pero también la de Nicaragua, son de bastante peso. Diversos testimonios sugieren que la coyuntura de El Salvador también tiene su influencia: el M-19 cree en un éxito rápido del FMLN. Es probable además que el M-19 se sienta más seguro obrando como fuerza militar que transformándose en fuerza política: el pluralismo doctrinario de que hace gala el movimiento puede dejar aparecer divi-

siones en un contexto de paz" (6). La paz era en esa época la liebre mecánica frente al galgo de carreras: un objetivo inalcanzable pese a lo mucho que se corriera tras de él.

Los operativos posteriores a la muerte de Bateman confirman la continuidad de sus concepciones en la organización. La toma de Florencia realizada a comienzos de 1984 como parte de la "campaña Jaime Bateman Cayón", es vista así por el comandante de la operación:

Queríamos entrar a Florencia, pelear un mes en la carretera y tirarnos para el Huila para continuar combatiendo allá donde hay menor densidad de población, donde el elemento geopolítico es mucho más importante que en el Caquetá, y llegar hasta el Tolima en una campaña a profundidad, tomando como punto de referencia la Campaña Admirable de Simón Bolívar, descojonando al enemigo, creando un ambiente político-militar de integración. Queríamos terminar esta campaña con un batallón armado por nosotros mismos. Si no ocurría así, consideraríamos que la campaña no habría dado sus frutos. De ella tendría que surgir una negociación o la confirmación de la guerra, no sólo con mayor fuerza sino con mayor potencia de fuego (7).

Sobre la operación de Corinto, Alfonso Jacquín se refiere de la siguiente manera:

Porque para el M-19 se acabó la tradición ineficaz del llamado 'muerte y huye' de la guerrilla colombiana, porque como decía Pablo (8) el grande, en su sencillez de profeta y como precursor de la concepción revolucionaria vanguardista en América Latina: "cuando derrotemos al ejército, el pueblo es el poder...", nuestro repliegue significaba garantizar la movilidad para así mantener la iniciativa, la ofensiva constante contra el enemigo, imponiéndole el combate en el terreno y las condiciones más favorables para nuestras fuerzas (9).

Y en cuanto a Yumbo, Carlos Pizarro Leongómez afirma que en esta acción y las anteriores se reflejaba

El nuevo comportamiento de la organización militar del M-19 tanto en el sur como en occidente, donde empezamos a disputarle al enemigo zonas fundamentales del país, ya no las más marginales, sino las importantes en su economía, en población. Se había roto con la guerrilla selvática, casi en ostracismo por las

6. *Idem*, p. 379.

7. Olga Behar, *op. cit.*, p. 225.

8. Se refiere a Bateman (N. del A.).

9. *Idem*, p. 237.

selvas del Putumayo, las selvas del Caquetá, las zonas perdidas del Chocó o de Nariño, para que la organización entrara a jugar un papel mucho más activo en la vida política del país. Estábamos ahora en el corazón de Cali y la veíamos al atardecer (10).

Que el M-19 creía haber llegado a la madurez militar es cosa cierta. Si alguna duda queda al respecto vale la pena recordar las aseveraciones de Alvaro Fayad, Comandante General, en la época de las negociaciones con Belisario Betancur:

Varias cosas debían quedar claras. En primer lugar, que no es cierto el argumento de los militares de que el ejército no derrota a la guerrilla, pero que la guerrilla tampoco derrota al ejército. Eso es falso, nosotros sí nos sentimos capaces de derrotarlos. En segundo lugar, no estamos cansados de la guerra ni sentimos que es una vaina inútil, no es que ahora pensemos sólo en los caminos electorales. No. Es una fuerza decisoria, el sentimiento nacional, la que reclama una resolución a sus problemas (11).

Los operativos de Florencia, Corinto, Miranda, Yumbo, realizados con gruesos contingentes de luchadores, de manera abierta y sobre centros urbanos importantes, desconcertó al ejército acostumbrado al convencional accionar guerrillero de pequeñas partidas en zonas de difícil acceso. El M-19 no comprendió que ese desconcierto pronto daría lugar a una readecuación de las respuestas oficiales al nuevo tipo de amenaza y, con ello, al regreso del equilibrio tradicional entre ejército y guerrillas donde, a la iniciativa táctica de estas últimas, se enfrenta la iniciativa estratégica del primero. Ese equilibrio se recompuso con nefastos resultados para el Movimiento Diecinueve de Abril. Mientras tanto y bajo el espejismo de una gran capacidad militar y política, su plana mayor accionaba, en la perspectiva de la guerra, el instrumento de la paz.

En la accidentada comunicación del M-19 con el gobierno de Betancur, en la multitud de equívocos, apuestas en falso y retórica para la opinión pública, hay algo que se destaca en la lógica negociadora de los comandantes: ellos hablan más de tregua y diálogo nacional que de paz. Un debate sofisticado donde el problema de la paz es un túnel en el cual no se sabe muy bien cuál es la entrada. Un complice bizantino, abstruso, inalcanzable.

Con la implícita voluntad de guerra del M-19 no podía haber una sincera voluntad de paz. Para el Movimiento, la inclinación de paz de Betancur era una imprevista oportunidad publicitaria para hacerle exigencias al gobierno que sobrepasaran su lógica de conservación e hicieran visibles sus límites. Daniel Pécaut dice algo clarificador al respecto al evocar los sucesos ocurridos en Los Robles (Valle) a comienzos de 1985:

el M-19 proclama (...) que el poder le impide convertirse en partido político. Sin embargo, la forma como rompe el cese al fuego tres meses después deja presentir que en realidad la mayoría de sus dirigentes no han visto en éste más que un intermedio durante el cual ampliarían sus bases urbanas. Es en vísperas de una huelga general, el 20 de junio, cuando dan a sus militantes urbanos la consigna de volver al monte. Imaginan que esta huelga se transformará en insurrección general. En realidad sólo es seguida en forma moderada y los habitantes de los tugurios, que se encierran en sus casas, muestran su temor a la violencia. El M-19 revela así, además del predominio de la tendencia militar en su seno, las ilusiones que se hace sobre el estado de la opinión (12).

Cuando la tregua se rompió el 21 de junio de 1985, muy pocos se sorprendieron de ello. El paréntesis de diez meses había estado lleno de puntos de ruptura gracias a la tensa actitud de los guerrilleros —que se sentían hostilizados por los militares— y de las mismas Fuerzas Armadas cuyos comandantes operativos no podían ocultar su afán por hostigar y desesperar a los rebeldes. A partir de ese momento, el M-19 se lanzó a una serie de acciones destinadas a mostrar la potencia de agresión exhibida antes de los acuerdos. Se repitieron las emboscadas, los ataques a los puestos policiales, las tomas de poblaciones y el populismo armado que repartía leche, pollos y granos en asaltos a camiones distribuidores de alimentos. Con todo, el ejército ya había empezado a asimilar el modo de operación del Movimiento y su iniciativa táctica era rápidamente neutralizada o compensada con fuertes contragolpes.

En escasos seis meses, desde la ruptura de la tregua hasta la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, el M-19 sufre un deterioro progresivo de su imagen militar y política. Pese a la formación del flamante batallón

10. *Idem*, p. 245.

11. *Idem*, p. 341.

12. Daniel Pécaut, *op. cit.*, p. 387.

"América", base de un supuesto ejército internacional, el Movimiento recibe entre otros varios, dos severos golpes: el ejército retoma el control de los barrios populares de Cali, antiguo bastión del M-19 y, en otra acción en la misma ciudad, es muerto su Comandante General Iván Marino Ospina. Todo esto contribuye a que, como lo señalara Pécaut, las Fuerzas Armadas no muestren ya "demasiada preocupación por el M-19" (13).

La toma del Palacio de Justicia es el esfuerzo del M-19 para reponer el deterioro de su impactante imagen anterior. A la pérdida de eficacia militar se sumaban los costos políticos de la ruptura de la tregua ya que, frente al Presidente, ellos aparecían como desprovistos de la voluntad y el aguante necesarios para sortear un proceso que todos suponían contingente y áspero. Belisario Betancur adquiría, en cambio, el perfil de un hombre de buena voluntad, pacifista, paciente y honrado, pero sometido a las zancadillas, sordas oposiciones e inercia de amplios sectores de su gobierno y bases partidarias. Era un hombre solo contra un establecimiento que no lo comprendía, y una guerrilla altanera y quisquillosa.

Los presupuestos del M-19 sobre la toma del Palacio fueron muchos y algunos de ellos originados no en la situación inmediata sino más atrás, en sus éxitos y venturas precedentes. Si lo de la Embajada había sido una "locura acertada", el acceso a las armas del Cantón "un cálculo bien hecho y una altísima dosis de suerte" (14), lo del Palacio tendría que ser, por "fuerza de la historia, el escenario de un juicio excepcional que debía concluir con una sentencia llamando a la formación de un nuevo gobierno" (15).

El M-19 sintetiza en el Palacio de Justicia las experiencias anteriores y cree equilibrar la preparación militar con las perspectivas políticas del golpe, en un proyecto cuya única equivalencia es la desmesura de los dos componentes. Su mayor cuidado en los aspectos logísticos, las comunicaciones, la sanidad y la inteligencia le

crean el espectro de un preparativo altamente conducente, por fuerza, a un éxito militar "que obligaría al gobierno y al ejército a negociar" (16). Y la proyección delirante de su proclama, una demanda armada concebida como "acto de nuevo gobierno" (17), es decir, de suplantación inmediata del poder, le crea el espectro de un acto político integrador de amplias reivindicaciones de clase.

El M-19 no entiende en ese momento que las Fuerzas Armadas no son solamente un objeto militar sino además, y sobre todo, un sujeto político. Un sujeto social altamente dinámico, que se mueve en un complejo campo relacional económico, político, cultural-ideológico y que no autoriza generalizaciones, asociaciones simplistas, extrapolaciones. El ejército y la policía bajo Turbay Ayala no tendrían por qué ser los mismos que bajo Belisario Betancur; el universo de las Fuerzas Armadas, sus convergencias y divergencias internas, sus relaciones con el mundo del poder civil, no tendría por qué ser igual frente a los hechos de la Embajada Dominicana y del Palacio de Justicia.

Aquel doble espectro enajenador, estas ingenuas abstracciones y el voluntarismo obnubilante de la organización, lo llevaron a hacer del Palacio de Justicia no un fortín de relanzamiento sino el activador de una enorme y dolorosa derrota. Poco tiempo después vendría la muerte de su Comandante General, Alvaro Fayad, en una oscura emboscada urbana que, además de cuestionar la competencia ofensiva de la organización, abriría serios interrogantes sobre su capacidad misma de supervivencia.

Desde la muerte de Fayad en marzo de 1986 hasta el secuestro de Alvaro Gómez en mayo de 1988, el M-19 no realiza ninguna acción espectacular más y su presencia se ve reducida a esporádicos combates rurales con el ejército y a su búsqueda de afianzamiento dentro de la población indígena del Cauca. La debilidad del movimiento es palpable y el secuestro de Alvaro Gómez ya no sería el gesto prepotente y descentrado del antiguo esquema guerrillero sino algo con mayores dosis de realismo.

13. *Idem*, p. 392.

14. Olga Behar, *op. cit.*, p. 163.

15. Ramón Jimeno, *Noche de lobos*, Bogotá, Editorial Presencia, 1989, p. 25.

16. Olga Behar, *Noches de humo*, Bogotá, Editorial Planeta, 1988, p. 122.

17. Ramón Jimeno, *op. cit.*, p. 37.

El comunicado del grupo "Colombianos por la Salvación Nacional", autor de la retención, es bien distinto a los mandatos conminatorios que caracterizaron a la organización en el pasado. En un lenguaje mesurado e integrador que no excluye ni coloca contra la pared ningún sector específico del establecimiento, se da a entender que la retención del dirigente conservador es un puente entre la guerrilla y la sociedad. El M-19, en boca de su nuevo comandante general Carlos Pizarro, lanza la propuesta formal de un alto al fuego y una cumbre de "Salvación Nacional" que provoca desconfianza en el gobierno y suspicacia en la opinión pública al evocar la incierta instrumentación que bajo Belisario Betancur tuvieron la tregua y el diálogo. Los rebeldes dan, sin embargo, esta vez, muestras de querer precisar las cosas. Los sucesivos contactos con líderes de los partidos Conservador, Liberal y Unión Patriótica, las FARC, la Iglesia, los gremios económicos y sindicales, condujeron a la liberación de Alvaro Gómez y a la reapertura del diálogo entre la guerrilla y algunos sectores de la sociedad, primero, directamente con el gobierno, después.

La búsqueda de concreción en las conversaciones, la claridad de los itinerarios pactados, el realismo de las demandas hechas, la flexibilidad para sortear los obstáculos, hablan de un nuevo M-19. El inspirado, audaz y voluntarista grupo de años anteriores le va dando paso a una guerrilla que empieza a comprender las ejemplarizantes fronteras de la realidad. Esta, la sociedad concreta, el país de carne y hueso, ha logrado hacerse oír por el M-19 después de atravesar las interferencias de muchos delirios, muchos subjetivismos, muchas revanchas. En la convalecencia de los rudos golpes recibidos, en la debilidad que genera la modestia y la sabiduría de los límites, el M-19 perdió esa peligrosa voluntad armada para lograr un objetivo social imaginario. Varias cosas contribuyeron a ello. En cuanto al Movimiento, la progresiva reducción de su potencia militar, el deterioro de sus perspectivas políticas y publicitarias, la muerte de sus mejores cuadros. En cuanto al contexto nacional, el fortalecimiento de la "guerra sucia" y la réplica paramilitar, el cansancio y repudio de la opinión pública frente a la violencia, la existencia de una invitación de paz del gobierno a los insurgentes.

2. LA MANO TENDIDA Y EL PULSO FIRME

La concepción sobre la paz del gobierno Barco no se comprende a cabalidad sin tener en cuenta la herencia que, por ese rubro, recibió del período anterior. Ese legado resultó con cláusulas de forzoso cumplimiento unas, condicionales otras, de libre adopción las demás.

Entre las primeras cabe mencionar dos:

- a. Los guerrilleros ya no son tratados como bandoleros y delincuentes comunes sino como rebeldes portadores de un estatuto político especial.
- b. El motor de la violencia es internalizado dentro de las fronteras patrias gracias a la desvalorización de la idea sobre las fuentes externas, transnacionales, de la subversión armada.

Entre las condicionales, o sea basadas en determinantes susceptibles de modificar, habría tres por señalar:

- a. El escepticismo general frente a la tregua, el diálogo y la concertación a consecuencia de la ambigüedad de sus términos, la insinceridad de las partes y el progresivo resquebrajamiento del proceso global.
- b. El fortalecimiento en las Fuerzas Armadas de la línea dura contra el proceso de paz como resultado de la eficacia del operativo sobre el Palacio de Justicia.
- c. El consenso opositor, finalmente explícito, de los gremios, las Fuerzas Armadas, el Parlamento y los partidos Liberal y Conservador contra el diálogo.

Entre las de libre acogida, por depender más de un estilo de gobierno que de condicionantes externos a él, se tendrían:

- a. El protagonismo unipersonal del Presidente en el proceso de paz a expensas de la búsqueda de compromiso de otras fuerzas: Parlamento, partidos, gremios.
- b. La desfiguración, por parte del gobierno, de la paz como un objetivo en sí mismo conce-

diendo así espacio a la guerrilla para hacer de la paz un proceso sin objetivo consecuente.

- c. La tesis gubernamental sobre las condiciones objetivas de la violencia (en causas económicas, sociales, políticas) y el ineludible reconocimiento derivado de la necesidad de profundas reformas de base para la consolidación del proceso.

Del anterior patrimonio, y por contrastación, uno puede establecer los rasgos más característicos del actual gobierno frente al problema de la paz. "La mano tendida y el pulso firme" es una significativa síntesis de lo que Virgilio Barco le acepta y le rechaza al pasado inmediato de la Presidencia. Acepta la disponibilidad formal hacia la paz con unos insurgentes políticos, pero rechaza la amplitud del diálogo, la concesión de oportunidades de agitación y propaganda derivadas del proceso mismo, el protagonismo unipresidencial, la confesión de las causas objetivas de la violencia y, por ende, el compromiso de removerlas por actos de Estado.

El tratamiento oficial al M-19 revela los rasgos de una política esquivada al prediseño estructural, orgánico, del problema, y más inclinada, en cambio, al realismo oportunista, a las soluciones puntuales. Cuando el secuestro de Gómez Hurtado la revista *Semana* definió con claridad la coyuntura:

Semana ha podido establecer que el gobierno ha tenido dos convicciones sobre las cuales ha basado su acción en este caso: bajarle los humos al protagonismo alcanzado por el M-19, y de ahí la censura al programa de Germán Castro Caycedo, basado en una entrevista con un dirigente del Movimiento; y buscar contactos directos y no muy publicitados dentro y fuera del país para lograr la liberación de Gómez lo más rápido posible con el mínimo de concesiones. "Para el gobierno es muy difícil dejar que se inflen las expectativas de un diálogo nacional de resultados inciertos y antecedentes fracasados conocidos, a sabiendas de que, en el momento en que Gómez sea liberado, todos los que hoy están hablando de diálogo desde fuera del gobierno, empezando por los partidos políticos, logrado el objetivo concreto, le saquen después el cuerpo a los compromisos y dejen al gobierno con la papa caliente entre las manos". explicó a *Semana* un alto funcionario oficial (18).

En el decurso del secuestro el gobierno juega, sobre la marcha de los acontecimientos, las cartas que la dinámica del insuceso va ofreciendo. Rechaza los contactos oficiales con la guerrilla bajo el "chantaje" de la retención de Alvaro Gómez, desaprueba y desestimula los contactos de líderes civiles con la guerrilla en la reunión de Panamá y, ante el hecho cumplido de los acuerdos, se confiesa satisfecho con éstos al asegurarle la libertad al dirigente conservador. Agrega después con cautela: "reiteramos, así mismo, que cualquier eventual decisión del gobierno en diálogo o reuniones resultantes de ese acuerdo, sólo se tomará dentro de un clima desprovisto de presiones" (19). La mano, en fin, continúa tendida.

El acuerdo de Panamá, suscrito el 14 de julio de 1988, conviene en la necesidad de buscar la reconciliación de los colombianos a partir de una reunión cumbre entre distintas fuerzas sociales por celebrarse en Bogotá dos semanas más tarde. Se precisa la exigencia de preparar el encuentro "con base en un temario concreto", preparado por una comisión integrada por los representantes de los partidos Conservador, Liberal y Unión Patriótica, la CUT, los gremios de la producción, los guerrilleros y la Iglesia. Finalmente se señala "el deseo de que el gobierno se haga presente en la reunión cumbre del 29 de julio para contribuir al éxito de sus deliberaciones" (20).

El 29 de julio la cumbre prevista en Panamá se efectúa en Bogotá, en el Centro de Estudios Pastorales, con representantes de la Iglesia, los partidos tradicionales, la UP, la guerrilla, los gremios, los sindicatos y los indígenas. Resalta en las intervenciones las críticas al gobierno por su marginamiento de la reunión pese a que a nombre de éste el Consejero para la Paz, Pardo Rueda, envía una carta donde en tono paternalista se advierten las desilusiones que puedan recibir los participantes, y los peligros resultantes de una nueva frustración que contribuya a acentuar el clima de la violencia. Pero es tal vez esa misma carta la que acentúa el clima de las críticas al gobierno.

El Partido Liberal, por boca de Ernesto Samper Pizano, enfatiza que el gobierno debe lide-

18. *Semana*. Bogotá, julio 12 de 1988.

19. *Semana*, Bogotá, julio 19 de 1988.

20. *Idem*.

rar el diálogo para que sea efectivo y señala: "para algunos, este encuentro puede no ser nada distinto a una respuesta a la intimidación, digamos que el pago de un rescate. Para nosotros es una nueva oportunidad para buscar la paz" (21). El presidente del Directorio Nacional Social Conservador argumenta que "el gobierno no está solamente obligado a registrar el hecho de esta reunión. Tampoco puede eludir su responsabilidad formulando propuestas que no constituyan una estrategia articulada, coherente y confiable frente a la situación de orden público gravemente alterado" (22). Finalmente, Alvaro Gómez imprecisa al gobierno por su inasistencia y dice que "no se trata sólo de una ausencia sino de una falta de audacia, de una carencia de política. No hay política de paz y cuando no hay política viene la anarquía" (23). Con la intervención de Gómez termina la cumbre que aprueba la convocatoria de una Comisión de Convivencia Democrática a instalarse el 22 de agosto, con un término de operación de 30 días. Se le pide al grupo preparador de la Comisión la búsqueda de contactos para la participación del gobierno y la guerrilla en las conversaciones.

La iniciativa de paz de Virgilio Barco, lanzada el 10. de septiembre de 1988, es la respuesta típica, por su oportunidad y contenido, de un gobierno cauteloso, siempre a la espera de que los acontecimientos le empiecen a marcar el derrotero, reacio a la inspiración y a la aventura. Tímido para bloquear los diálogos entre sectores privados y guerrilla, pues no sabe en qué puede parar aquello, termina por ocupar el espacio de unas ganas crecientes de diálogo y paz que animan a amplios segmentos de la sociedad. De las usuales fuentes "del alto gobierno" la revista *Semana* destaca lo siguiente:

el gobierno no estaba de acuerdo con la forma como se estaba desarrollando esta nueva etapa de conversaciones con la guerrilla, pero no podía evitar que particulares y representantes de la guerrilla hablaran. Lo que sí podía hacer fue lo que hizo: echar su carta sobre la mesa presentando el plan de paz (24).

El plan Barco comprende tres fases: a) de Distensión (por la creación de un nuevo clima de

convivencia a partir de demostraciones reales de buena voluntad de paz por parte de la guerrilla, sobre todo mediante un cese al fuego unilateral); b) de Transición a la vida civil (dada por tres pasos: 1o. establecimiento de garantías reales políticas, económicas y sociales que hagan posible el regreso de la guerrilla a la vida institucional, 2o. coordinación con entidades públicas y privadas de todo lo necesario para lograr lo anterior, 3o. ubicación de los guerrilleros en zonas de paz bajo la protección del ejército y la policía); c) de Desmovilización (reglamentada por dos pasos: 1o. regreso a la vida democrática, sin armas, 2o. creación de Consejos Regionales de Normalización que supervisarán el cumplimiento de los acuerdos y prepararán el recibimiento y la atención de los alzados en armas en su regreso a la vida civil).

Las reacciones a la iniciativa gubernamental se dividieron entre quienes veían por fin un proyecto claro y conciso en los ofrecimientos oficiales de paz y quienes lo estigmatizaban por su falta de generosidad, por su fría puntualidad, por su aire de ultimátum para la rendición. Entre estos últimos vale la pena recordar tres opiniones. La de Misael Pastrana Borrero: "el proyecto me defraudó. Parece hecho en un laboratorio y es muy académico. Contempla una cantidad de procesos dilatorios que pueden ser tan largos de ejecutar como los pasos de una procesión de Semana Santa". La del presidente de la UP, Bernardo Jaramillo: "el plan de paz parece hecho por un grupo de asesores expertos en tratados de paz internacionales, porque no se tomó en cuenta que Colombia vive un conflicto interno muy grave. Fue hecho como si ya hubiera un vencido y un vencedor". La de Ramiro Lucio, actual vocero del M-19: "no es un plan de paz, sino un itinerario de desmovilización. El presidente, al haberlo querido enmarcar en el esquema gobierno-oposición olvidó que el ABC de la paz es el consenso. Hoy la paz es liberal, pero también lo es la guerra" (25).

La Comisión de Convivencia Democrática presidida por Monseñor Darío Castrillón, pide compartir con sus buenos oficios el espacio abierto por la iniciativa de paz del Presidente.

21. Idem.

22. *Semana*, Bogotá, agosto 2 de 1988.

23. *Semana*, Bogotá, septiembre 6 de 1988.

24. Idem.

25. Idem.

La intención del gobierno es, sin embargo, la de conservar un solo corredor de comunicación con las guerrillas, la de oficializar el acercamiento de aquellos grupos insurgentes que demuestren su voluntad de acogerse a los precisos ítems de la oferta de reconciliación. La firmeza del gobierno en tal sentido, las hábiles y encubiertas presiones sobre los partidos tradicionales y la Iglesia, le van quitando el aire a la Comisión que se ve enfrentada a una rápida crisis de representatividad hasta el punto de disolverse por la no convocatoria de sus miembros. El gobierno logra entonces, como se lo propuso, erigirse en el único interlocutor público y válido de la guerrilla. La mano tendida es la iniciativa de paz; el pulso firme es su negativa a que el eventual proceso se le salga de las manos y se convierta en espacio de publicidades subversivas, de propuestas y contrapropuestas difusas.

Pero tras del pulso firme están también las Fuerzas Armadas de Colombia. Estas, en su convicción represiva y en sus márgenes de acción no son las mismas que en los primeros tres años del gobierno Betancur aceptaron las negociaciones de paz; el gran efecto demostrativo de la contra-toma del Palacio de Justicia, la libertad operacional que el Presidente le dio a los jefes militares en ese momento y la lenta y ambigua respuesta de los órganos institucionales de control a los desmanes oficiales, ha influido de modo notable en "el pulso firme" esgrimido por el mandato de Barco. No se puede hablar de descontento militar en este período como sí lo hubo durante un buen tiempo en el anterior. Más aún, si como ya se dijo, al ejercito en grueso no le preocupaba gran cosa el estado de guerra con el M-19 bajo Betancur (después del fracaso de la toma del Palacio, bien entendido), poco le preocupaba ahora el estado de negociación con el mismo Movimiento. En el espectro guerrillero general, sus enemigos de cuidado son otros.

Es en ese ambiente en el que el M-19 entra a la paz. Una propuesta que como la de Virgilio Barco parece a punto de fracasar, va a ser relanzada por un sector minorista de la guerrilla portador de una voluntad de convivencia institucional que es el resultado de su realista pérdida de voluntad para la guerra.

De la relación guerrilla-sociedad que representaron el encuentro de Panamá y la Comisión de Convivencia Democrática se pasó, por la iniciativa de paz de Barco, a una negociación tripartita que incluía al gobierno. En la sesión de clausura del Congreso, a fines de 1988, el Presidente Barco anunció la apertura de diálogos formales entre el gobierno y el M-19. En enero de 1989 Rafael Pardo, Consejero Presidencial para la Paz, y el jefe máximo de la organización rebelde, Carlos Pizarro, firmaron el acuerdo que enmarcaría un preciso itinerario de paz conducente a la desmovilización del grupo y a su integración en la vida civil. El gobierno logra, con este paso, concretar su iniciativa de paz de septiembre lanzada al limbo por buena parte de la opinión pública como irreal e inaceptable para el conjunto del movimiento guerrillero.

A principios de marzo voceros del gobierno y el M-19 ratifican, en México, el convenio de enero y acuerdan la conformación de "mesas de trabajo" con participación oficial, del grupo guerrillero y de los partidos políticos con representación parlamentaria. Tal medio de concertación comprende, según las palabras de Virgilio Barco, "dos procedimientos de diálogo paralelos, pero independientes. Uno sobre desmovilización del grupo guerrillero. Otro sobre temas que tienen que ver con la consolidación de una democracia plena. Esto último se discutirá con los partidos políticos en unas mesas de trabajo, las cuales deben llegar a conclusiones antes de iniciarse la próxima legislatura, el 20 de julio" (26).

La Mesa de Trabajo es instalada el 3 de abril por el propio Presidente de la República, en el Palacio de Nariño, con la siguiente participación: el Consejero para la Paz, sus asesores, los ministros de Justicia, Comunicaciones y Gobierno, por el sector oficial; el presidente de la Dirección Nacional del Socialconservatismo y el Secretario General del Liberalismo, por los partidos políticos; por el M-19, participan los voceros acreditados ante el gobierno en la protocolización de apertura de la segunda fase del proceso de paz, de la Transición a la vida civil, hecho cumplido el 17 de marzo en la sede de la comandancia general del Movimiento situada

en la vereda de Santo Domingo, municipio de Toribío, departamento del Cauca. La Unión Patriótica se abstiene de concurrir alegando que ha condicionado su presencia a la toma de medidas oficiales eficaces contra el terrorismo de derecha y éstas no se han producido.

El asesinato del comandante Afranio Parra y otros dos militantes del M-19, ocurrido en Bogotá el 7 de abril, es calificado por el Ministro de Justicia como "un asesinato contra la paz" (27), con lo cual expresa el enorme sobresalto que vive el proceso de reconciliación a causa del insuceso. El gobierno actúa con prontitud e identifica y apresa a los policías culpables; el M-19 reafirma su voluntad pacifista pero aprovecha la coyuntura para presionar al Estado en la concesión de oportunidades publicitarias: la propuesta, ya hecha con anterioridad, de rotar las sedes de las Mesas de Trabajo llevando una a Santo Domingo, y la de hacer del cortejo fúnebre de Afranio Parra, una gran manifestación de protesta que recorriera por tierra la distancia entre Bogotá y la comandancia general del Movimiento, en Toribío.

El gobierno muestra, de nuevo, el pulso firme frente a un grupo insurgente enmarcado dentro de unos parámetros de negociación que le restringen cualquier iniciativa mayor. Es ese el momento en el cual se espera que el M-19 declare colmada la taza, rebasada su voluntad de paz, y dé la abrupta reversa que ya se le conoció en ocasiones anteriores. En la interpretación prevista según el comportamiento pasado, bien podría pensarse que el Movimiento también buscaba la tregua actual para oxigenarse políticamente, desahogarse militarmente y enrostrarle al gobierno su incapacidad para asegurar la integridad física de los negociadores. Nada de eso ocurre, sin embargo. El M-19 no tiene fuerzas para comprometerse en los abruptos virajes de antaño y si eso le resta beligerancia, por un lado, le aumenta realismo, por el otro.

La Mesa de Trabajo se reanuda el 18 de abril y como cuando fue iniciada, los portavoces oficiales enfatizan que sus sesiones serán a puerta cerrada para evitar espectáculos políticos que le puedan restar seriedad a sus deliberaciones.

Para acelerar los resultados del diálogo se crean las nuevas Mesas de Análisis y Concertación, instancia concebida "para que los distintos sectores y fuerzas representativas de la sociedad se vinculen al proceso de reconciliación" (28). Con un período fijo para sesionar en el Capitolio Nacional, establecen un amplio temario de 19 temas centrados en tres áreas: de convivencia, justicia y orden público, la primera; de aspectos socioeconómicos, la segunda; de aspectos de orden constitucional y electoral, la tercera. En la primera área se acogen temas como el paramilitarismo, el narcotráfico y el derecho internacional humanitario; en la segunda se integran, entre otros, puntos relativos al plan de vivienda, precios y salarios, y planeación concertada; en la tercera se habla del plebiscito, de los procedimientos para elaborar una nueva Constitución y de la reforma electoral.

3. ¿UNA SOLA PAZ, APENAS?

La oposición al proceso de paz de Virgilio Barco puede separarse según los intereses ideológicos de sus contradictores. Hay una crítica tradicional del establecimiento, proveniente de los antiguos socios del Frente Nacional, en la que prima el ejercicio electoral de la oposición, la suspicacia de principio tendiente a rebajar los logros políticos del opositor de turno. Hay también una crítica contestataria de izquierda disparada desde dos trincheras: la de la UP, primero, coludida con los intereses de las FARC, que se resiente del protagonismo político del M-19, de la orquestación oficial hecha al hijo pródigo en tránsito hacia los lares de la prometeda tierra democrática; la de una izquierda radical, después, que sin matices considera al M-19 un divisionista, un debilitador del frente de lucha contra la oligarquía. Críticas todas ellas que apuntan a los dos interlocutores del diálogo según las relaciones de proximidad y oposición que han tenido con éstos.

Hay sin embargo, en su conjunto, un elemento común: el desprecio larvado por los esfuerzos que los dos sujetos han tenido, sin duda, que hacer. Voces escépticas del mismo estableci-

27. El Tiempo, Bogotá, abril 8 de 1989.

28. El Tiempo, Bogotá, mayo 7 de 1989.

miento se han pronunciado sobre una paz cicateramente parcelada alrededor de un pequeño grupo que cubre menos del diez por ciento de la capacidad militar de la subversión. Voces rudas y autosuficientes se han levantado desde la izquierda para menospreciar un hecho que no le permite al gobierno ocuparse de "los problemas gruesos" (29).

Pero hay en tales críticas, pese a su oportunismo o resentimiento, una cosa cierta. La paz se ha parcelado porque el gobierno no tiene una visión clara, integral, de cuáles son los actores de guerra y, por ende, cuáles son los actores susceptibles de paz. No comprende a cabalidad la combinación de intereses tácticos y estratégicos entre los diferentes actores sociales que agreden su proyecto democrático. Ha preconcebido una sola violencia (la política de izquierda) y ha sufrido la violencia del narcotráfico, pero ha hecho todo lo posible por escamotear la definición de esa violencia política de derecha que desde dentro del Estado o fuera de él se sirve por igual de los desmanes de la izquierda, como pretexto, y del desespero del narcotráfico, como recurso. Los golpes que el gobierno le ha propinado recientemente a algunas escuelas de sicarios, las destituciones de algunos oficiales comprometidos en violaciones de los derechos humanos y las medidas legales contra las formaciones de autodefensa, no son aún suficientes ni para un diagnóstico coherente del problema ni para una estrategia de acción que lo resuelva. Con todo, desde otros lugares del campo institucional aparecen refuerzos en favor de esa urgente tarea esclarecedora. El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia contra las normas que habilitaban los grupos de autodefensa es de crucial importancia. Le corresponde a la sociedad civil apoyar ese refuerzo que en boca de un magistrado de la Corte hace desaparecer "el primero de los aliados" de las organizaciones paramilitares (30), y luchar contra los tenebrosos ataques de quienes, como Plinio Apuleyo Mendoza, ven en la declaratoria de inexequibilidad del artículo 33 del Estatuto de Defensa Nacional, un acto de juristas bobos situados "a 2.360 metros de altura sobre la realidad del país" (31).

La paz con el M-19 puede servirle al Estado para sacarle el cuerpo a una definición lúcida e inclemente sobre el complejo tejido económico, social y político de las violencias. Con la puntual y empírica técnica de la ingeniería civil tan propia de quien rige la dirección de nuestro país, Barco ha angostado el proceso de convivencia hasta los límites más estrechos de la previsibilidad y el concordato. Haciendo la paz con el M-19 se ha eximido de imaginar con audacia, de ofrecer con generosidad, de hacer con verdadera voluntad política, un diseño de paz integral para la sociedad colombiana.

Y ha habido, por supuesto, oportunos dividendos políticos en esa forma de hacer la paz. En un momento en que las últimas horas de la jornada le dan más penumbra que luz a las ejecutorias de los gobernantes, Barco empieza a brillar con luz propia. La paz con el M-19 le ha permitido darle contenido a una frase hueca, a un simple lema de seducción como es el de "la mano tendida y el pulso firme". Ahora bien puede, según la retórica presidencialista, decirle a la historia que ofreció un programa de paz dentro del que no cupieron, pese a sus esfuerzos, los recalcitrantes enemigos de la democracia.

Esa retórica, sin embargo, no alcanza a ocultar los límites en que se encuentra sumida en la actualidad la concordia nacional. Uno de esos límites, y bien importante, es el siguiente: los acuerdos con el M-19 se han ido realizando en la medida en que el delicado equilibrio de fuerzas entre el ejército salido del Palacio de Justicia y los negociadores ilustrados de la Consejería de Paz, no ha sido alterado de modo importante. Pese a que, como ya dijimos, en el momento actual al conjunto de las Fuerzas Armadas no le preocupe demasiado el proceso de paz con el M-19 como grupo minoritario que es, de las guerrillas, pueden salir de su seno esfuerzos parciales para sabotearlo. La antidemocracia de algunos soportes del poder económico y político puede, por lo demás, estar presta para evitar que el reintegro de la guerrilla a la lucha civil se convierta en una amenaza contra su estabilidad. Y para tal propósito emplearían, ellos sí, cuanto recurso antiinstitucional tengan a mano. Incluida la subversión del terror y de las armas.

29. Jacobo Arenas, según entrevista a Caracol.

30. *El Tiempo*, Bogotá, mayo 29 de 1989.

31. *El Tiempo*, Bogotá, mayo 27 de 1989.

Más allá de las habilidosas críticas contra la paz en proceso con el M-19 y de sus confines reales, lo que se está haciendo es, sin embargo, de gran importancia. Para quienes miran con angustia ese enorme saldo inercial de la violencia al que se le suman día a día nuevos incentivos, la paz con el M-19 no solo es significativa sino necesaria. Y es que la política, aun entre los peores antagonistas, es siempre una práctica que deja beneficios recíprocos y complementarios. No se pueden desvalorizar los pasos actuales del M-19 por el valor de oportunidad que tengan para los intereses particulares de un gobierno con el que eventualmente no se esté de acuerdo.

La política del M-19 le sirve a Virgilio Barco pero también le sirve, y es lo importante, a la sociedad civil. Muy por encima de las curiosas consideraciones estadísticas de la oposición (porcentajes sobre la potencia de fuego general de la insurgencia armada, más o menos muertos de cada lado), hay que señalar el gran sentido ejemplarizante de ese adiós a las armas. Por fin un grupo guerrillero se despoja de los heroicos pero fatídicos sueños de tomar el poder por asalto en Colombia. Por fin un grupo guerrillero reconoce el compromiso histórico de poner al servicio de la reestructuración del Estado y la sociedad civil, su poderosa voluntad transformadora.

Quienes anhelan la paz y creen en la convivencia necesitan al M-19 en la lucha legal. Su nueva experiencia descubrirá la verdadera capacidad de nuestra estrecha democracia para asimilar la crítica al poder. Todos aquellos que implícitamente aceptan el exterminio de la Unión Patriótica bajo el pretexto de sus alianzas con las FARC, tienen en el M-19 un enérgico contraargumento para desmontar sus peligrosas salvedades. El M-19 va a mostrar si la lucha legal de izquierda es posible en Colombia y si el Estado tiene la voluntad política necesaria para asegurar el ejercicio de la oposición fundamental al sistema. El fracaso de la organización en su empeño civilista sería, sin duda, el fracaso de la democracia colombiana.

Pero hay que esperar todavía que las conversaciones actuales conduzcan a la creación de un espacio lo suficientemente sólido para recibir a los desmovilizados. Hay aún vaguedades y

obstáculos que atentan contra el éxito de las negociaciones. Los escenarios del diálogo (gobierno, partidos políticos en el Congreso), no aseguran responsabilidades precisas sobre las reformas que deben enmarcar el ingreso institucional de los alzados en armas. El gobierno, con una hábil previsión de costos, ha evadido cualquier compromiso directo con los cambios necesarios. El Congreso, bien se sabe, es un campo donde el pensamiento sobre el país resulta secundario frente a los intereses de grupo. Como lo señalara Juan Tokatlián, "sería incongruente que en un diálogo multipartito los representantes no gubernamentales propugnaran por reformas de envergadura con un alto contenido retórico y a nivel de legislativo actuaran en desmedro de las reformas. La *realpolitik* de sostener una tesis en un medio y hacer otra en otro es altamente costosa, no para el que emplea esa táctica sino para el verdadero proceso de paz" (32).

Los indicios actuales no son muy alentadores. La clase política parece más interesada en los ajeteos electorales del noventa que en el tema de las reformas. Ya vemos cómo los compromisos adquiridos por el Congreso para adelantar el replanteamiento constitucional empiezan a difuminarse en medio de las tácticas partidistas para sumar adhesiones sobre la perspectiva de la próxima contienda electoral. ¿Qué será entonces de las propuestas del M-19 en las nuevas mesas de Análisis y Concertación? Si se tiene en cuenta que entre el 25 de mayo y el 10 de julio debe haber un acuerdo político entre gobierno, guerrilla y partidos, lo que se presagia no es nada claro. Las más de cien organizaciones sociales que se han inscrito en las tres Mesas (la número uno, de Convivencia, Justicia y Orden Público; la número dos, de Aspectos Socioeconómicos; la número tres, de Aspectos de Orden Constitucional y en Materia Electoral) han mostrado con su masiva presencia y con el tipo de propuestas presentadas hasta ahora, el habitual y peligroso estrangulamiento de nuestros canales de participación. La ansiedad de muchas de las propuestas, la insistencia de algunas en el inveterado incumplimiento del gobierno a viejas iniciativas suyas, y aun el dramático desenfoque frente a la realidad na-

32. *Semana*, Bogotá, agosto 16 de 1988.

cional actual de otras, demuestra la presión lista a levantarse que existe en el país cuando a la sociedad civil se le abre así sea una pequeña compuerta.

La potencialidad objetiva de las Mesas de Análisis y Concertación contrasta de manera muy ruda con las necesidades y expectativas de quienes acuden a ellas. Estas no son instancias decisorias sino, más bien, ejercicios de opinión pública calificada para llevar propuestas a la Mesa de Trabajo original y aquí, si son acogidas y asumidas por consenso, deben hacer tránsito hacia el gobierno y el Congreso. Más de un filtro sin duda. Filtros que en el caso colombiano, con una clase política insensible a las corrientes subterráneas de la dinámica social y con una oposición radical de izquierda cegada por el maximalismo ideológico, pueden taponar cualquier salida racional a la crisis.

Pero, ¿se puede estar seguro de la real vocación de paz del M-19? Las condiciones actuales del contexto político y las de la misma organización, que ya hemos señalado, parecen permitir una respuesta positiva. El realismo que al Movimiento le ha dado su debilidad orgánica, militar y política, le ha permitido, además, una visión más descarnada sobre los vagos e ilusorios paradigmas del socialismo internacional tan caros al conjunto de la izquierda colombiana. La frase de un dirigente del M-19, en una charla informal en Centroamérica, revela el nuevo talante ideológico de ese grupo frente a las acres lecciones de la realidad internacional: "es preferible un capitalismo carnívoro a un socialismo vegetariano".

No obstante, puede ocurrir también que el M-19 se deje seducir por la rentabilidad a corto plazo de los espacios públicos que se le están permitiendo, y tome todo ello como una oxigenación que le dé nuevos aires en una eventual reanudación de la guerra. Así la convivencia se alejará, otra vez más, de nuestras manos. Y la liebre, esa paz perseguida por grandes sectores de la sociedad civil, será escamoteada de nuevo por las evasiones y artificios de la mecánica política nacional de siempre.